

# ¿Cómo evitar que el «caso metástasis» se vuelva una coartada?

Luis Córdova-Alarcón

Con el «Caso Metástasis» la Fiscal General toma la iniciativa. Su «teoría del caso» es verosímil y por primera vez se pone el cascabel al gato, implicando a varios operadores de justicia que hacen posible el «orden crimi-legal» que opera en Ecuador.

Sin embargo, es vital huir de las explicaciones simplistas y las conclusiones rápidas. Pues no se trata de una lucha entre buenos y malos. La «zona gris de criminalidad», que se ha configurado entre actores estatales, empresariales y criminales, es tan grande y flexible que puede convertir al «Caso Metástasis» en una gran coartada para afianzar una «paz mafiosa» que mitige la violencia criminal en las calles, sin afectar las economías ilícitas más boyantes.

¿Cómo evitar que esto ocurra?

Primero, empecemos señalando lo obvio: durante el gobierno de Rafael Correa se tejió una red extorsiva con apoyo estatal para proteger a ciertos grupos criminales. Así se garantizó una «paz mafiosa» que facilitó la expansión del narcotráfico. Esto lo argumenté en octubre de 2021 <https://shorturl.at/EJLS0> y lo sostengo. Con el paso del tiempo, las piezas de evidencia son cada vez más contundentes en ese sentido.

Sin embargo, es ingenuo pensar que tras su salida del poder las redes de crimen organizado solo operarían con esos políticos. Y que al neutralizar a sus operadores –si ese fuese el afán de la Fiscalía– se asesta un golpe mortal a la estructura reticular del crimen organizado en Ecuador.

Esta falta de comprensión de la dinámica criminal ha engeguado a los tomadores de decisión durante los gobiernos de Moreno y Lasso. Su anticorreísmo obtuso facilitó que otros operadores criminales se mimeticen en el Estado, llegando a ser ministros.

Segundo, vamos a lo importante: urge una reforma policial integral, total y de largo aliento.

El «caso metástasis» incrimina al general Pablo Ramírez, quien hasta el 3 de diciembre estaba en servicio activo. En 2020, cuando aún era Coronel, fue Director Nacional de Educación de esa institución –bajo la comandancia de Patricio Carrillo y con María Paula Romo como Ministra del ramo–; por tanto, fue el ejecutor de las políticas de reclutamiento y formación de policías. En mayo de 2021, bajo la comandancia de Tania Varela, el

coronel Ramírez fue designado comandante de la Zona 4 (Manabí y Santo Domingo), precisamente el área de influencia de Norero y base de apoyo del narcotráfico. En agosto de 2021, Ramírez ascendió a General y un mes después pasó a formar parte del gabinete ministerial de Guillermo Lasso, como Director de la SNAI. A pesar de las continuas masacres carcelaria, duró casi un año en el cargo y, en agosto de 2022, con Patricio Carrillo como Ministro del Interior, fue designado Director Antinarcóticos.

Según la Fiscal General, el general Ramírez trabajaba para Norero, es decir, para «Los Lobos», «ChoneKillers» y «Tiguerones»: todos ellos rivales de «Los Choneros», según los “informes de inteligencia” de la Policía.

Cabe entonces preguntarse ¿Si el general Ramírez protegió y trabajó para Los Lobos, qué general(es) protegen y trabajan para «Los Choneros»? O vamos a comernos el cuento de que se trata de otro “caso aislado”.

Tercero, lo más urgente: hay que repensar las relaciones de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos y sus agencias de seguridad. ¿Cómo fue posible que Pablo Ramírez ascendiera a General y fuera Jefe Antinarcóticos sin que la Embajada de los EE.UU. –el INL y la DEA– detectara su participación criminal?

El «caso metástasis» pone en entredicho la política antidrogas que enorgullecía al ex Presidente Lasso: por romper récord en decomiso de cocaína. Ahora resulta que el “zar antidrogas” de su gobierno y “enlace” de confianza de la Embajada de EE.UU. en la lucha antinarcóticos era un narcogeneral.

En fin, el «caso metástasis» abre una ventana de oportunidad para avanzar en estas tres direcciones: desmoralizando la política de seguridad, emprendiendo una reforma policial integral y replanteando la cooperación en seguridad con EE.UU.

Caso contrario, la «zona gris de criminalidad» seguirá funcionando y sus operadores darán un nuevo zarpazo para precautelar sus intereses.

Con un gobernante amateur y ambicioso no es difícil que se adelanten negociaciones de una «paz mafiosa» y que el «Caso Metástasis» sirva para dejar fuera de juego a ciertos actores, mientras los economías criminales prosperan con otros operadores.

